

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 2º Juzgado de Letras de Iquique
CAUSA ROL	: C-3-2020
CARATULADO	: GARAY/AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.

Iquique, diecinueve de Abril de dos mil veintitrés

VISTO:

A folio 1, subsanada a folio 23, comparece don **LUIS FERNANDO DÍAZ MUÑOZ**, abogado, en representación de doña **EVELYN PATRICIA ARDILES CASTILLO**, comerciante, cedula de identidad N°10.582.859-4 y don **ORLANDO SEGUNDO GARAY CASTRO**, comerciante, cedula identidad N°8.272.895-3, todos con domicilio para estos efectos en Calle Sotomayor N° 575 oficina 402, comuna de Iquique, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, en juicio ordinario de mayor cuantía, en contra de **AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.**, representada legalmente por don **SERGIO PATRICIO FUENTES FARIAS**, Ingeniero Civil, cédula nacional de identidad N°10.709.557-3, o quien en derecho representa a la persona jurídica precitada, domiciliados en calle Aníbal Pinto N°375 de la ciudad de Iquique.

Expone que los demandantes mantienen una larga relación sentimental, y viven juntos en el inmueble ubicado en calle Yungay Bajo N° 3669-A, sector la Tortuga, comuna de Alto Hospicio, de propiedad de doña Evelyn Ardiles Castillo.

Señala que el día 15 de mayo de 2017, el vecino de los demandantes, presenta un requerimiento ante la demandada a las 10:54 horas solicitando que la empresa asista a su domicilio por no tener suministro de agua potable, concurriendo a las horas después personal de la demandada, al realizar una revisión, se percata que existe una filtración en el arranque situado al exterior de la propiedad colindante a la de los demandantes, filtrándose el agua por más de 20 horas, dándose solución final por la demandada al día siguiente, es decir el 16 de mayo a las 10:25 horas.



Añade que posteriormente el día 11 de julio de 2018 en el mismo lugar de la reparación realizada por la demandada la primera vez, se produce una nueva rotura en el arranque afuera de la propiedad de la demandante y de su vecino, lo que causó un hundimiento de terreno, extendiéndose al interior de la propiedad, debiendo lidiar con malos olores, humedecimiento de paredes, y la aparición de un socavón.

Indica que la solución dada por la empresa demandada consistió en la rotura del pavimento del Pasaje Yungay a la altura del N°3669, justo frente al inmueble de sus representados.

Expone que como consecuencia de las filtraciones, se produjeron diversos daños al inmueble debido a la negligencia de la demandada, al no haber reparado de manera adecuada la primera filtración del año 2017, a pesar de tener la certeza de que en la comuna de Alto Hospicio, es absolutamente peligroso por la naturaleza del suelo, no actuar diligentemente al momento de efectuar una reparación, lo que la demandada no realizó, lo que se tradujo en que durante largas horas escurriera agua descontroladamente el día 11 de julio del año 2018, produciéndose un socavón, lo que ha provocado daños estructurales a la propiedad que habitan los demandantes, la que durante 10 años no tuvo problema alguno.

Señala que la demandante doña Evelyn Ardiles, con fecha 19 de febrero de 2019 realizó un reclamo ante la demandada, solicitando fiscalizara el estado del alcantarillado, así como los malos olores, exponiendo brevemente los daños causados al inmueble, la demandada al día siguiente, es decir el 20 de febrero, responde que no es su responsabilidad, que se realizaron todas las acciones para revertir la emergencia del día 11 de julio de 2018, y que sería producto de la salinidad del suelo.

Posteriormente con fecha 7 de marzo de 2019, la demandante solicita pronunciamiento de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), cuya respuesta de fecha 10 de mayo señala que la empresa demandada registra 4 ingresos en el Pasaje Yungay Bajo de la comuna de Alto Hospicio asociadas a roturas en los arranques;



luego expresa que los arranques y matrices de agua potable son parte constitutiva de la pública de distribución, por lo tanto su mantención, operación y, a su turno, la renovación es una responsabilidad de la cual la empresa no se puede desatender.

Arguye que la demandada argumentara que el daño es producido por la salinidad del suelo, condición que se presenta en la mayor parte de las construcciones de la ciudad de Alto Hospicio, pero en el caso de autos, el inmueble que habitan los demandantes no habría presentado problema alguno y por la rotura en el arranque como se explicó anteriormente, el inmueble experimentó un significativo daño, los que consisten en síntesis en perforación loza del radier comedor, murallas exteriores e interiores presentan problemas de humedad y hongos; daños en muros y tabiques interiores los que se encuentran desprendidos de la base, por otra parte también humedad en las tabiquerías, puertas y pisos en general.

Añade que existe una diferencia en el terreno entre el ante jardín y parte de la sala de estar de la vivienda producto del socavón, como se dijo anteriormente, como consecuencia de la infiltración del agua, situación que es progresiva con el tiempo debido a la carga de la propia estructura de material.

Indica que sin perjuicio de los daños materiales ocasionados, de igual forma los demandantes han sufrido un daño moral, ya que antes de estos hechos, sus vidas eran normales sin mayores preocupaciones, en cambio hoy viven preocupados por el daño causado a la vivienda producto de la rotura y fuga del agua, y del temor constante de que el inmueble pueda ceder en cualquier momento, amenazando la vida e integridad física del grupo familiar, además de la presencia de un hedor durante el día debiendo retirarse de él, regresando por las noches cuando es más soportable.

Señala que la responsabilidad se genera con ocasión de la infracción a una norma, sea esta de carácter constitucional, legal o reglamentario y aún de carácter contractual, lo último según lo dispuesto en el artículo 1545 de nuestro Código Civil. Cita y reproduce



conceptos de la doctrina de la responsabilidad civil, en ese orden indica que el concepto de responsabilidad civil cumple 2 funciones, la primera preventiva y la segunda de reparación, alegando esta última en virtud que el daño producido ha persistido desde el año 2016 a la fecha.

Cita y reproduce los artículos 2314, 2284, 2316 y 2329 del Código Civil, de los cuales extrae que los requisitos de la responsabilidad en cuestión son: 1.- que ese hecho provenga de culpa o dolo; 2.- que cause daño; 3.- que entre el hecho doloso o culpable y el daño exista una relación de causalidad; y 4.- que este hecho dañoso o culposo sea imputable a determinada persona.

1.- En cuanto al hecho imputable, señala que la conducta de la demandada ha sido negligente, lo que deriva en un hecho ilícito civil culpable y por tanto indemnizable.

Señala que el artículo 2329 del Código de Bello, establece una suerte de presunción de responsabilidad que reconoce 2 grupos de casos, en uno, las actividades particularmente peligrosas y aquellas en que el daño ha sido causado con negligencia según lo expuesto en fallo de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 29 enero de 2008.

Agrega que se ha fallado que una empresa no solo es responsable de la puesta en marcha o la continuidad de una operación, como en este caso, la distribución del agua a la comunidad, y que el daño ha sido causado por la culpa de la demandada, que en el caso concreto consiste en que la demandada a la fecha de la rotura, las tuberías estaban defectuosas o deficientes para soportar el aumento de agua, lo que produjo en definitiva los daños descritos con anterioridad.

2.- Con respecto al daño, lo define como “aquel menoscabo que experimenta un individuo en su persona y bienes, la pérdida de un beneficio de índole material o moral, de orden patrimonial o extrapatrimonial”, refiere que el daño debe ser cierto. Menciona que



los daños sufridos por los demandantes son directos e indirectos, sin perjuicio del daño moral sufrido.

3.- En relación a la culpa, estima que la conducta de la demandada ha infringido un deber de cuidado, actuando negligentemente.

4.- Por último, en lo tocante a la causalidad, señala que el colapso del arranque no es el resultado de un caso fortuito, sino que se debió a la negligencia de la empresa demandada como consecuencia de la ausencia de mantenimiento, sumado a la desprolija reparación, que hacen evidente la relación de causalidad existente.

Agrega que hay relación de causalidad, pues si eliminamos la culpa o el dolo atribuido al sujeto activo, el daño no se habría producido.

Menciona y reproduce fallos de la I. Corte de Apelaciones de Iquique, en dicho sentido.

Por lo expuesto y previas citas legales, solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios en contra de **AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.**, representada legalmente por don **SERGIO PATRICIO FUENTES FARIAS**, ambos ya individualizados, acogerla a tramitación y en definitiva declarar que se condene al pago de una indemnización total por la suma de **\$35.000.000.- (treinta y cinco millones de pesos)**, o lo que su Señoría estime conforme a derecho, con expresa condena en costas, cantidad que se desglosa de la siguiente forma:

a.- Daño emergente, respecto de doña Evelyn Ardiles Castillo al ser la propietaria del inmueble afectado, la suma de **\$15.000.000.- (quince millones de pesos)**, o la suma que su Señoría determine conforme al mérito del proceso.

b.- Daño Moral, respecto de doña Evelyn Ardiles Castillo la suma de **\$10.000.000.- (diez millones de pesos)** y respecto de don Orlando Garay Castro la suma de **\$10.000.000.- (diez millones de**



pesos) o las sumas que su señoría estime conforme al mérito del proceso.

A folio 25, comparecen don **CHRISTIAN BARRERA PERRET** y don **ROBERTO BÁEZ CASTILLO**, abogados, en representación de la parte demandada **AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.**, contestado la demanda solicitando el total y absoluto rechazo de la misma en todas sus partes, con expresa condena en costas, basado en los antecedentes de hecho y de derecho que expone.

Niega y controvierte todas y cada una de las pretensiones y peticiones de la parte demandante, en especial el hecho de que la demandante doña Evelyn Ardiles Castillo, sea propietaria del inmueble de autos objeto de los daños que reclaman, ya que no existen antecedentes en el proceso que lo acrediten, señalando además lo siguiente:

Aún en el evento hipotético que la demanda no fuere controvertida por su parte, igualmente debiera ser rechazada, con expresa condena en costas, en consideración a la inexactitud de los hechos señalados, la falta de responsabilidad de la demandada y la carencia de los elementos para dar lugar a cualquier clase de responsabilidad, lo que constituyen argumentos suficientes para el rechazo de las pretensiones de la parte demandante.

Expone que los hechos que constituyen la responsabilidad extracontractual, deben ser alegados por la parte demandante en su libelo, lo que no habría ocurrido, en especial en cuanto a la eventual culpa o negligencia, es decir, el elemento subjetivo de la responsabilidad alegada, ya que en materia civil no existe responsabilidad objetiva.

También señala que en el evento de probar la demandante el dominio del inmueble, la demanda debe ser rechazada, debido a que no existen antecedentes que permitan establecer culpa por parte de la demandada, que ameriten el supuesto resultado dañoso a la propiedad como lo indico la demandante en su libelo, expone que ninguna de las 2 fallas del arranque que señala la contraria, que en



definitiva correspondían a la vivienda vecina, provocaron escurrimientos de agua al inmueble de autos, y de existir daño alguno, este se ha producido por otros hechos que no fueron provocados por la demandada, los cuales desconoce, cumpliendo con la normativa aplicable.

Tampoco se aprecia el nexo causal entre el hecho generador del daño y el daño mismo alegado, la contraria argumenta una serie de hechos los que serían falsos, según se explicará, señalando que las filtraciones del arranque habrían provocado los daños en la propiedad, lo que no es efectivo y que fue constatado por personal de la empresa demandada. Más aun cuando la propiedad se encuentra en la cota de la solera, las aguas por lógica no pudieron escurrir al interior del inmueble sino que solo a la calle, añadido a que la rotura se produjo a la altura de la casa colindante al inmueble que habitan los demandantes, es decir, en la propiedad ubicada en calle Salitrera Yungay Bajo N° 3669 y la vivienda respecto de la cual la demandante alega dominio, corresponde a calle Salitrera Yungay Bajo N° 3669-A, comuna de Alto Hospicio.

Asimismo, opone las siguientes excepciones perentorias:

En primer lugar, opone la excepción de falta de legitimación activa por parte del demandante don Orlando Garay Castro, ya que aquel tendría la calidad de conviviente de quien alega ser propietaria del inmueble de los supuestos daños, no se explica en el libelo como este ha sufrido el daño moral demandado, ni los hechos en los que se fundamenta.

En segundo lugar, la improcedencia del estatuto de responsabilidad extracontractual alegada por la contraria, como se ha dicho, no consta el dominio de la demandante doña Evelyn Ardiles respecto del inmueble, porque de acreditarse que es dueña, existiría un contrato de prestación de servicios entre aquella y la empresa demandada, e incluso en el caso de aplicarse una interpretación errónea en que se entendiere que efectivamente rigen las normas de responsabilidad extracontractual, del modo que se encuentra



planteada la teoría del caso de la demanda, la actuación de la demandada no tiene ninguna relación de causalidad con los hechos que provocaron el supuesto daño alegado.

Señala que el estatuto jurídico aplicable, es el de la responsabilidad contractual, toda vez que existiría claramente un vínculo jurídico previo, entre la parte demandante y demandada respecto del suministro de agua potable, no obstante que la demandante ha recurrido a normas de la responsabilidad extracontractual para fundamentar su acción, se está frente a una cuestión de responsabilidad contractual, no solo por el vínculo jurídico previo sino también por la normativa legal aplicable, lo que debería ser suficiente para su rechazo.

Cita y reproduce artículo 92 del Decreto Supremo N° 1199/4 del Ministerio de Obras Públicas (Reglamento de Concesiones Sanitarias). Agrega que los hechos demandados devienen de la relación contractual entre las partes y no de un hecho ilícito, cuasidelito civil, ni menos de la ley, es decir, en esta materia rigen las normas contractuales que fijan las partes, siendo sólo reguladas por la Superintendencia respectiva, pero sigue siendo materia privada y no pública como lo pretende la demandante.

Señala que la jurisprudencia ha indicado que existiendo relación contractual entre las partes, derivando los hechos de una circunstancia accesoria a la misma, deben aplicarse las normas de la responsabilidad contractual por sobre las normas de la responsabilidad extracontractual, y tampoco puede existir un concurso de responsabilidades en la que tuviere el actor que elegir.

Arguye que es la misma demandante la que claramente da a entender que los hechos alegados, corresponden a una hipótesis de responsabilidad contractual, al indicar que concurrió ante la demandada exigiendo el cumplimiento de obligaciones que solo pueden ser exigibles entre el prestador y el usuario, a contrario sensu, de no existir este vínculo contractual, no podrían ser exigibles las obligaciones contenidas en la demanda, y que la calidad de cliente



queda establecida de conformidad al artículo 53 letra j) del D.F.L. 382 Ley General de Servicios Sanitarios y el artículo 2 del Decreto Supremo N° 50 de 2002, del Ministerio de Obras Públicas, el cual cita y reproduce.

Expone que la jurisprudencia y la doctrina han adherido a la opinión del profesor Alessandri, considerada relevante en materia de responsabilidad, quien sostenía que la infracción de una obligación contractual, cuasicontractual o legal da origen a la responsabilidad contractual únicamente; jurisprudencia que hasta hoy, sigue descartando la posibilidad de admitir la opción, repitiéndose en fallos recientes. Menciona sentencias que han seguido dicho criterio.

De manera que lo expuesto por la contraria apunta a un supuesto incumplimiento en la obligación de la empresa demandada de entregar un servicio de calidad, atendido el vínculo jurídico entre las partes, por lo que al encontrarse la demanda mal formulada debe ser rechazada.

En tercer lugar se refiere a cómo habrían ocurrido los hechos o fallas del arranque indicando lo siguiente:

a) Respecto a la falla del arranque ocurrida el 15 mayo de 2017: señala que el día indicado, el cliente colindante del inmueble de autos, efectuó un requerimiento a la empresa demandada a las 10:45 horas, personal de la demandada a las 11:30 horas ya se encontraba en el lugar, estableciéndose como diagnóstico una falla que provocó una filtración de arranque de material HDPE de 20 milímetros, a lo que se dió en ese mismo acto solución, reparándose de manera transitoria para que se detuviera filtración en el momento, regresando posteriormente ese mismo día a las 21:08 horas para dar solución final y cambiar el HDPE de 20 mm., por uno nuevo; solicitando el mismo cliente del inmueble afectado ubicado en calle Yungay Bajo N° 3669, comuna de Alto Hospicio, que atendido que ya no existía filtración y lo avanzado de la hora, volvieran a repararlo al día siguiente, llevándose a efecto la reparación definitiva el 16 de mayo, reemplazándose la pieza afectada, de manera que como se ha dicho, no existió daño



alguno ni filtraciones de ningún tipo, ni fue necesario sanitización, la que se efectúa siempre por protocolo cuando escurren aguas a las propiedades afectadas por roturas de arranque, negando toda afirmación de la contraria del hecho que habría escurrido o filtrado agua a las propiedades, en especial la aseveración respecto del hecho que la filtración de agua habría durado más de 20 horas.

b) Respecto a la falla del arranque ocurrida el 11 de julio de 2018: señala que ese día a las 13:05 horas se ingresó un requerimiento a la empresa, asistiendo su personal al sitio y comenzando la reparación a las 15:43 horas porque el arranque tenía una filtración, pero ello ocurrió en la propiedad del vecino, es decir, calle Yungay Bajo N°3669, de Alto Hospicio, no en la propiedad correspondiente a la numeración N°3669-A, dándose solución transitoria parando la filtración, reparándose definitivamente a las 20:37 horas, al igual que en la situación anterior, tampoco hubo filtraciones a las propiedades de ningún tipo.

En cuarto lugar, alega que ha actuado con la debida diligencia en la mantención de las redes públicas de agua potable y alcantarillado, en especial de las matrices y arranques, en estas últimas materias existen protocolos en caso de fallas establecidos en el Estatuto Tarifario, aprobado y fiscalizado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios que la demandada cumple a cabalidad. En materia de redes públicas también efectúa mantención preventiva, que consiste en renovación de tuberías cuando estas cumplen su vida útil, que es de 50 años según el fabricante.

Además, existen medidas de corrección y mantención que van más allá de las establecidas en las Bases tarifarias de la demandada al alero del D.F.L. N° 70, Ley de Tarifas de los Servicios Sanitario, así, en el caso de la matriz y arranque del siniestro, tiene una data desde el año 2002 por lo que le resta aun 31 años vida útil. Cita y reproduce artículo 122 del Reglamento de Servicios Sanitarios, el cual obliga a la demandada a contar con un procedimiento para atender las emergencias.



Expone que el instructivo para clasificación de atenciones (oficio SISS N° 441, de fecha 12 de febrero de 2002) define lo que es atención de emergencia, para lo cual se requiere que el prestador establezca un estándar de calidad medible asociado a los atributos relacionados con una atención de emergencia, realizada con prontitud y en forma permanente.

Cita y reproduce los indicadores, señalando que se han cumplido por la demandada todas las obligaciones que le imponía la normativa sectorial aplicable, no incurriendo en ningún hecho ilícito, ni culposo.

Explica que la legislación sanitaria no se pone en la situación de exigir que no se produzcan incidentes de rotura o filtraciones, sino que si se producen, deben repararse dentro de los plazos establecidos, con lo cual se cumple la obligación de cuidado, pero en ningún caso se trata de responsabilidad objetiva, sino subjetiva que requiere incumplir las obligaciones de mantenimiento y corrección, establecidas en el decreto tarifario, al alero de la legislación sanitaria, que es la forma en que se plasman las obligaciones sanitarias, documento autorizado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Por último, niega la existencia de daño emergente y moral, no siendo procedente la indemnización de perjuicios por supuestos daños que tienen la naturaleza de indirectos, ya que por su causalidad como se ha expresado, no fueron provocados por la demandada, sino por otras circunstancias.

Reitera la improcedencia de los daños, porque no consta la calidad de propietaria alegada en la demanda del inmueble que habría sufrido los supuestos daños, y en el evento que la contraria lograra acreditar el dominio, su parte niega la existencia de los daños alegados, los que solo han sido señalados de manera genérica en la demanda, siendo por tanto imprecisos.

Indica que es imposible que el daño emergente alegado haya ocurrido, o al menos imposible que hayan sido ocasionado por la rotura del arranque, puesto que las 2 filtraciones tuvieron una diferencia de un año y duraron menos de 3 horas, siendo imposible



que en ese lapso de tiempo se provocaran los daños consistente en socavones, humedecimiento muros y demás, los que por tanto deberán ser probados por la contraria.

Adiciona que, estos perjuicios demandados, de existir, tienen el carácter de indirectos, ya que si el demandante ha sufrido algún tipo de perjuicio o daño, ello no es imputable a la demandada, ni a su conducta, la cual siempre se ha sujetado a la normativa vigente. Por cuanto el actuar de la demandada al encuadrarse dentro de la ley y el contrato, no puede producir daño alguno a los demandantes, y si estos efectivamente lo sufrieron, como lo han manifestado, no puede ser consecuencia de la actuación de la empresa demandada.

Al mismo tiempo señala que la contraria presentó la carta de reclamo ante la demandada, por supuestos socavones y hundimientos de muros de su propiedad, el día 19 de febrero del año 2019, es decir, casi dos años después de ocurrido el primer hecho alegado en su demanda y justamente 10 días después de que existieron fuertes lluvias en la comuna de Alto Hospicio, lo que fue un hecho público y notorio por el terreno salino en que se encuentran ubicadas las viviendas lo que provoca socavones. Por esta razón los hechos no dicen relación con el actuar de la demandada y los daños se produjeron por otras causas que podría ser la expuesta recientemente, no existiendo como se ha dicho, relación entre el daño supuestamente sufrido por las demandantes y la conducta de la demandada.

Al mismo tiempo, si existieran daños a la propiedad, estos no son imputables a la conducta de la demandada, puesto que la demandante está pretendiendo se le indemnicen daños indirectos por hechos cometidos por un tercero, y que nuestra legislación señala no son indemnizables, pues solo de indemnizan los directos previstos y en ciertas casos los imprevistos. Cita y reproduce doctrina al respecto.

Arguye que las alegaciones efectuadas, se amparan en jurisprudencia del caso, citando y reproduciendo fallo Rol C-963-2015, caratulados “ARANÍBAR con AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.” del Primer Juzgado de Letras de Iquique.



En subsidio de las defensas expuestas, objeta el daño emergente y el daño moral, solicitando su rebaja prudencial, para el evento improbable que el tribunal estime que la demandada haya tenido responsabilidad en el resultado dañoso, solicitando lo siguiente:

Respecto al daño emergente demandado: aclara que respecto de la demandante doña Evelyn Ardiles, éste no se ha acreditado y corresponde más bien a un perjuicio indirecto; y para el caso de que lo lograra acreditar, controvierte la valuación de dicho daño, expresando que dicha demandante, no expone cómo llega al monto de indemnización por daño emergente que indica, tampoco qué parámetros ha utilizado para ello, limitándose a señalar en dicho párrafo solo la cuantificación de la supuesta pérdida.

Tampoco la demandante doña Evelyn Ardiles ha acreditado la existencia de un permiso de edificación, ni los certificados de recepción definitiva de la construcción del inmueble cuyos daños se alegan, ni el dominio del mismo, por lo que de no existir no puede exigírsele a la demandada responsabilidad por los posibles daños, ya que se considera inhabitable el inmueble de acuerdo al artículo 145 Ley General de Urbanismo y Construcciones, el cual reproduce, y para el caso poco probable de estimarse procedente, se solicita su valuación y rebaja prudencial.

Respecto del daño moral: señala que los demandantes no fundamentan el daño que dicen haber sufrido, sino que se limitan solo a expresar el supuesto sufrimiento experimentado; también tampoco manifiestan que el daño moral haya devenido en uno material, ni ha señalado que como consecuencia del daño moral haya sufrido un perjuicio económico, como lo ha exigido la jurisprudencia, razón por la cual, al no contener fundamento alguno la demanda en este aspecto, estima que no es procedente la indemnización por daño moral solicitada y que debe rechazarse de plano, y de acogerse, solicita se rebaje prudencialmente el monto solicitado por cada uno demandantes, atendido a ser excesivo de acuerdo a la naturaleza de



los hechos expuestos y la supuesta responsabilidad atribuida a la demandada.

A folio 28, se tuvo por evacuado el trámite de la réplica en rebeldía de la parte demandante.

A folio 29, la parte demandada evacuó el trámite de la dúplica, reiterando todos los antecedentes de hecho y derecho vertidos en la contestación de la demanda.

A folio 39, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, con la asistencia de ambas partes, llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce.

A folio 41, se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. Modificada parcialmente a folio 51.

A folio 129, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que a folio 1, subsanada a folio 23, comparece don **LUIS FERNANDO DÍAZ MUÑOZ**, abogado, en representación de doña **EVELYN PATRICIA ARDILES CASTILLO**, y de don **ORLANDO SEGUNDO GARAY CASTRO**, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, en juicio ordinario de mayor cuantía, en contra de **AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.**, representado legalmente por don **SERGIO PATRICIO FUENTES FARIAS**, solicitando se condene a la demandada al pago de la suma de **\$15.000.000.- (quince millones de pesos)** por concepto de daño emergente respecto de doña Evelyn Ardiles Castillo, y al pago de la suma de **\$10.000.000.- (diez millones de pesos)** por concepto de daño moral a cada uno de los demandantes, o la suma que el tribunal estime conveniente conforme a derecho, todo con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que a folio 25, la parte demandada contestó la demanda solicitando su total rechazo por los motivos expuestos en lo expositivo del presente fallo.



TERCERO: Que la parte demandante a fin de acreditar su pretensión acompañó los siguientes medios de prueba:

a.- Documental:

A folio 55:

1.- Ord. Regional, Región de Tarapacá N°4297/2019, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, donde informa detalle de emergencias atendidas por la demandada en la calle en que se ubica el inmueble de autos por agua potable y agua servida; y los detalles de reclamos ingresados contra la demandada donde se solicita compensación por los daños ocasionados en la comuna Alto Hospicio desde el 2017, respondiendo a través de anexo 1 y anexo 2 de fecha 2 de julio de 2019.

2.- Set de 4 Fotografías de la propiedad de autos ubicada en Yungay Bajo N°3669- A.

3.- Certificado de daños 030/2021, emitido por la Dirección de obras Municipales de la Municipalidad de Alto Hospicio, de fecha 05 de julio de 2021, que certifica que la propiedad de autos se encuentra en condición de Reparable-Habitable (sector jardín) producto daños sufridos a causa de socavamiento terreno por filtraciones red pública agua potable y alcantarillado.

4.- Certificados de residencia junta de vecinos “Vida Nueva” de fecha 13 de julio de 2021 a nombre de los demandantes don Orlando Segundo Garay Castro y doña Evelyn Patricia Ardiles Castillo.

5.- Cancelación y Alzamiento de hipoteca y prohibición Serviu I región de fecha 26 de agosto de 2005 de la propiedad de autos.

6.- Certificado de dominio vigente del inmueble ubicado en pasaje Yungay Bajo N°3669- A, inscrito a fojas 809 Vuelta Número 1323 del registro de propiedad del año 2004 del Conservador de Bienes Raíces de Iquique a nombre de doña Evelyn Patricia Ardiles Castillo.

7.- Carta de fecha 19 de febrero de 2019 por parte de doña Evelyn Ardiles Castillo a Aguas del Altiplano, exponiendo la situación



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXKTXEGXVLV

del daño de la cañería del vecino, provocando una rotura que afecto a su vivienda.

8.- Carta de respuesta de Aguas del Altiplano CAS-691181 a doña Evelyn Ardiles, de fecha 20 de febrero de 2019, señalando que los daños se han producido a consecuencia de un hecho ajeno a la demandada, además de encontrarse la vivienda en una área de alta concentración salina.

9.- Comprobante de atención de Superintendencia de Servicios sanitarios folio N°20374025 de fecha 7 de marzo de 2019, informando que la Superintendencia carece de facultades legales para hacerse parte de contiendas de daños a la propiedad y a las indemnizaciones.

10.- Ord. Regional Región de Tarapacá N°3134/2019, de fecha 10 de mayo de 2019.-

11.- Solicitud de acceso a la información ingresada a portal de transparencia para la SISS de fecha 2 de noviembre de 2019 N° AM011TO0002832.-, solicitando información respecto del trabajo de reparación realizado por la demandada en calle salitrera Yungay bajo N°3669 comuna de Alto Hospicio periodos 2017-2018.

En cuanto a los documentos signados bajo los N°2 y 4 se tuvieron por acompañados bajo apercibimiento del artículo 346 número 3 del Código de Procedimiento Civil, y los restantes documentos acompañados con citación, no objetados.

A folio 59:

12.- Copia del oficio Ordinario número 73, de 9 de enero de 2014, suscrito por la Superintendente de Servicios Sanitarios dirigido al Segundo Juzgado de Letras de Iquique respecto de causal rol C°271-2013, por el que se informa que la vida útil de las tuberías de PVC es aproximadamente de 50 años, estando diseñadas para resistir una conducción a máxima presión de trabajo.

13.- Manual Tuberías y Fittings HDPE, emitido por el fabricante DURATEC – VINILIT S.A, donde se consigna que la vida útil de las tuberías es superior a 50 años.



14.- Ejemplar de “Bases Definitivas Estatuto Tarifario empresa de servicios sanitarios Aguas del Altiplano S.A.”, (Mayo 2012), elaborado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, para el período 2013-2018.

15.- Manual de uso y Mantenición de la Vivienda, Región de Tarapacá, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, año 2007, donde señala que el norte de Chile tiene una gran cantidad de sales, las que son solubles, entre ellas la comuna de Alto Hospicio.

16.- Informe N°612.685-A, sobre Lineamientos para determinación de Colapsabilidad de suelos por disolución de sales del IDIEM, elaborado por Roberto Olguín, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Universidad de Chile, año 2010. En el cual se constata que los suelos salinos especialmente en las comunas de Arica y Alto Hospicio, son esencialmente colapsables ante la presencia de agua, es decir, no sólo la que proviene de una filtración, sino la que proviene de regar, de las lloviznas, humedad por denominada camanchaca etc.

17.- información geológica de la comuna de Alto Hospicio por SERNAGEOMIN a solicitud de Serviu Tarapacá, donde se analiza la composición de sales en la comuna de Alto Hospicio en relación al informe N°612.685-A.

18.- Ficha 16 elaborada por la SISS, “Suelos salinos colapsables: una amenaza latente”, donde se expone que existen tipos de suelo que se ven muy afectados por filtraciones y roturas, como los suelos salinos colapsables, y señala cuáles serían las potenciales amenazas del mismo, y que se puede hacer.

19.- Manual del cliente, emitido por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Documentos acompañados con citación, no objetados.

A folio 60:

20.- Respuesta de Superintendencia de Servicios Sanitarios a solicitud N°AM011TO0002832.

21.- Copia de Protocolo de información PR013 indicadores de calidad de servicio, donde informan entre otros los reclamos y



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXKTXEGXVLV

emergencias (detalle de emergencias y reclamos recibidos en Alto Hospicio entre el año 2017 y 2019).

22.- Copia de protocolo de calidad de servicio remitida por la Superintendencia de Servicios Sanitarios de abril 2017.

23.- Captura de pantalla de Consulta de saldo en www.aguasdelaltiplano.cl/datos-consultasaldo respecto de N° de Servicio 713375, correspondiente a doña Evelyn Ardiles respecto del inmueble de autos.

24.- Captura de pantalla de Consulta de saldo en www.aguasdelaltiplano.cl/datos-consultasaldo respecto de N° de Servicio 713374 correspondiente a doña Francisco Jeria Saavedra respecto del domicilio ubicado en calle Salitrera Yungay Bajo N°3669 de la Comuna de Alto Hospicio.

b.- Confesional:

A folio 120, comparece don **Christian Barahona Rubio**, Gerente Regional de Aguas del Altiplano S.A., Rut N°14. 280.663-0, con domicilio en calle Esmeralda N°340 piso 10, comuna de Iquique, quien legalmente juramentado declara al tenor del pliego de posiciones, indicando que no le consta que entre el año 2016 al 2019 se hayan producido más de 7 averías o fallas en el arranque ubicado en calle salitrera Yungay bajo a la altura del 3669 A, comuna de alto Hospicio, pues llegó a Iquique a finales de 2018, y de los antecedentes que le hicieron llegar, ellos dan constancia de 2, uno el 2017 y otro el 2018; señala que solo le consta que la emergencia del 15 mayo del año 2017 se visitó en menos de 2 horas, la solución provisoria se realizó en menos de 6 horas, y la definitiva en menos de 48 horas que son los estándares definidos por la SISS para este tipo requerimientos; tampoco le consta que la falla o avería del arranque denunciada el 11 de julio de 2018 haya demorado más de 10 horas; añade que no le consta si hubo un incremento en el numero reclamos por hundimiento de terrenos por los vecinos del sector, precisa que Alto Hospicio se encuentra emplazado en terrenos de alto contenido de sal, que son conocidos por todos los eventos de hundimiento producto de diversas



causas; agrega que no le consta que luego del año 2017 se hayan presentado más de 10 reclamos por hundimiento de terreno; declara que es efectivo que la demandada es responsable de la calidad y continuidad del servicio y efectuar las reparaciones de eventuales averías a la infraestructura pública, tales como matrices y colectores en los plazos establecidos por la SISS, que es de 2 horas para efectuar vista preliminar, 5 o 6 horas para efectuar una reparación provisoria dependiendo si es arranque o matriz y 48 horas para la reparación definitiva.

Señala que no es efectivo que la demandada sea responsable del hundimiento del terreno de los demandantes, dado que la problemática en Alto Hospicio es la presencia de suelo salino, por lo que los requisitos de construcción debieron haber sido considerados por el urbanizador para evitar este tipo de inconvenientes.

c.- Otros:

A folio 82 y 87, se recibió oficio de la **Superintendencia de Servicios Sanitarios**, el cual indica que de los registros de reclamos y emergencias del período y sector solicitado, se constataron 6 eventos, destacando los siguientes: el 15.05.2017 cuyo motivo fue sector sin agua; el 11.07.2018 asociado a hundimiento de terreno y el 19.02.2019 asociado a compensación por daños a cliente; y de este ultimo se realizó un reclamo a la Superintendencia, el que fue respondido mediante el ORD N°3134/2019 del 10.05.2019, indicando la carencia de facultades legales al respecto, realizándose nueva denuncia que fue respondida remitiéndose todas las emergencias registradas y casos de compensación de daño en calle Salitrera Yungay, comuna de Alto Hospicio solicitada por los demandantes.

A folio 103, se lleva a cabo **audiencia de exhibición documental**, decretada a folio 64, respecto de los documentos ordenados exhibir a la demandada.

A folio 125, se puso en conocimiento de las partes **informe pericial**, suscrito por don Marcial Segundo Flores Yavar, Ingeniero Civil en Construcción, especialidad Constructor Civil y Obras, que



consigna que dada la alta concentración de sales solubles que posee el sector de Alto Hospicio y que al verse sometidos a la infiltración y/o inundaciones sufren la disolución de ellas provocando hundimientos, socavaciones y/o asentamientos diferenciales en el subsuelo; por lo que se podría suponer la existencia de una alta probabilidad de socavamiento del terreno bajo la vivienda de Pasaje Yungay Bajo N°3669-A del Conjunto Habitacional “300 Viviendas” de la comuna de Alto Hospicio.

CUARTO: Que la parte demandada no acompañó probanza alguna.

QUINTO: Que, para la adecuada resolución del asunto, y con miras a despejar la normativa aplicable, será útil esclarecer de manera preliminar el tipo de responsabilidad que regula los hechos denunciados en la demanda, atento que aquella de naturaleza extracontractual invocada por la actora, aparece rebatida por la empresa sanitaria demandada, quien sostiene la existencia de un vínculo contractual entre las partes, debiendo, por ende, haberse ejercitado la acción conforme las reglas previstas para la responsabilidad contractual.

SEXTO: Así, cabe referirnos al tema de la “conurrencia de responsabilidades”, que se presenta cada vez que un mismo acaecer dañoso es susceptible de integrar el supuesto de hecho de la responsabilidad contractual y el de la extracontractual, por ejemplo en aquellos casos en que la responsabilidad alegada emana de una prestación de servicios, o de contratos en que las partes alegan indistintamente la responsabilidad contractual y la extracontractual.

Para resolver este tema existen diversas teorías en la doctrina, entre ellas, la “Teoría de la Opción”, a la que esta sentenciadora adscribe, la cual, según señala María Teresa Alonso Traviesa, en su obra “El Problema de la Conurrencia de Responsabilidades”, *“parte de la base que la responsabilidad convencional y la aquiliana son pretensiones jurídicas distintas y autónomas, que no se excluyen mutuamente, y por lo mismo, pueden concurrir respecto de un caso*



concreto. De tal forma que la víctima, en los supuestos dañosos ubicados en las “zonas fronterizas”, cuenta con dos acciones para exigir la reparación del daño causado: la derivada del incumplimiento del contrato y la proveniente del principio general de no dañar a otro. El perjudicado, entonces, puede exigir la tutela jurídica por cualquiera de las dos vías, dado que la existencia de la violación de una obligación contractual no excluye la procedencia de la acción aquiliana. La única limitación que se le impone es la imposibilidad de ejercerlas simultáneamente, salvo que las invoque conjuntamente mediante la acumulación subsidiaria o alternativa de acciones.

En virtud del principio dispositivo, el actor podrá presentar la pretensión como desee, ya que está facultado para elegir el medio por el cual exigirá la indemnización de los perjuicios, sin embargo, la elección que haga vinculará al juez, que se encuentra sometido a la calificación jurídica hecha por las partes.” (Alonso Traviesa, El Problema de la Concurrencia de Responsabilidades”, ob. Cit. pág. 397).

Por lo anterior, esta Juez estima que resulta perfectamente posible en este caso, accionar en virtud de la responsabilidad extracontractual, no obstante existir un vínculo contractual entre las partes, de modo que será materia de prueba el acreditar que el supuesto fáctico en que se apoya la demanda, cumple con los requisitos que hacen procedente el tipo de responsabilidad alegada.

Cabe mencionar que la teoría de la opción ha sido aceptada y recogida por jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, incluso en aquellos casos en que no se trata de hechos de dudosa calificación jurídica, por ejemplo en sentencia de 26 de enero de 2000, por la que acogió la acción de responsabilidad extracontractual por los daños derivados del incumplimiento de un contrato de promesa de compraventa. (R.D.J., t. XCVII, sc. 1ª, 2000, págs. 36 y ss.).

SEPTIMO: Del estudio de los hechos relatados en la demanda, aparece que la responsabilidad reclamada deriva de la supuesta falta de mantenimiento y reparación oportuna de instalaciones sanitarias,



puntualmente aquellas definidas por las letras c) y e) del artículo 53 de la Ley General de Servicios Sanitarios, y encontrándose regulado el cumplimiento de dichas obligaciones en la legislación y reglamentos atinentes a la actividad sanitaria, ello lleva a concluir que las infracciones denunciadas no residen en el vínculo usuario - prestador de servicios sanitarios alegado por la demandada, sino en la observancia de la conducta impuesta legal y reglamentariamente al desarrollo de tal labor. Por lo que los hechos fundamento de la acción corresponden a materias que pueden perfectamente conocerse en sede de responsabilidad extracontractual.

OCTAVO: Que, respecto a la alegación efectuada por la demandada, de que la demanda debió ceñirse a las reglas de la responsabilidad contractual, debe estarse a lo resuelto en los motivos precedentes, con especial atención a la concurrencia de ambas responsabilidades, permitiéndole a los demandantes accionar conforme éste lo estime, debiendo sólo ceñirse al estándar probatorio de cada una de las responsabilidades en su caso.

NOVENO: Que establecida la procedencia de la responsabilidad alegada al caso concreto, como se ha dicho en el basamento anterior, la acción ejercida por los demandantes, es la de indemnización de perjuicios, fundada en las normas de la responsabilidad extracontractual civil, contenidas en el Título XXV del Libro IV del Código Civil, disponiendo el inciso primero del artículo 2329 de dicho cuerpo legal que “Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta”.

DECIMO: Que, en efecto, son presupuestos de la responsabilidad extracontractual demandada, los que deben concurrir de manera copulativa, los siguientes: a) Capacidad, e Imputabilidad del hecho a su autor; b) Existencia de un hecho ilícito, ejecutado con dolo o con culpa; c) Existencia de un daño; d) Relación de causalidad entre el hecho generador y el daño ocasionado.

DECIMO PRIMERO: Que para determinar la procedencia de la pretensión de los actores, y por lo mismo, la existencia de la



mencionada responsabilidad extracontractual de parte de la demandada, se hace necesario verificar la concurrencia de manera copulativa de los presupuestos enunciados en el considerando anterior, los que deben ser acreditados por los demandantes, toda vez que son el fundamento de la obligación indemnizatoria cuya existencia y cumplimiento reclama, principio probatorio, este último, que se desprende del artículo 1698 de nuestro Código Civil.

DECIMO SEGUNDO: Que, respecto al primero de los requisitos citados, la capacidad de la demandada, al ser la capacidad la regla general en nuestro ordenamiento jurídico, y al no haberse alegado hipótesis de incapacidad alguna, se da por cumplido.

DECIMO TERCERO: Que, en cuanto a la existencia de un hecho ilícito, del tenor de la demanda se desprende que los hechos que sirven de fundamento a la misma, consisten en síntesis, en que el día 15 de mayo de 2017, aproximadamente a las 10.54 horas, el vecino de los demandantes se comunicó con Aguas del Altiplano debido a que no contaba con suministro de agua potable, concurriendo personal de la demandada al lugar, el que al efectuar la revisión, se percata de la existencia de una filtración en el arranque situado al exterior de la propiedad de éste, filtrándose el agua por más de 20 horas, escurriendo al inmueble de los actores de calle Yungay Bajo N° 3669, comuna de Alto Hospicio, dándose solución final al día siguiente. Que luego el día 11 de julio de 2018 en el mismo lugar de la reparación anterior, se produce una nueva rotura del arranque que habría provocado que el agua nuevamente escurriera ingresando a la vivienda de propiedad de los demandantes, causando graves daños al interior de ésta, lo que habría originado un hundimiento del terreno del antejardín, humedecimiento de paredes, malos olores y la aparición de un socavón.

DÉCIMO CUARTO: Que, con la documental que obra en autos, valorada de conformidad al artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, en relación a los artículos 1700 y siguientes del Código Civil, en especial la copia del certificado de dominio vigente del inmueble de



autos; la carta de fecha 19 de febrero de 2019; el Ord. N°3134/2019 Región de Tarapacá Superintendencia Servicios Sanitarios; el Certificado de daños 030/2021 emitido por la I. Municipalidad de Alto Hospicio que indica que la propiedad de autos se encuentra en condición reparable-habitable; la copia de Protocolo de información PR013 indicadores de calidad de servicios; el detalle de los reclamos y emergencias recibidas entre 2017-2018 en la comuna de Alto Hospicio, y el informe pericial elaborado por el Perito Ingeniero Civil don Marcial Flores Yavar, ponderado de acuerdo al artículo 425 del Código de Procedimiento Civil, es posible tener por establecido lo siguiente:

1.- Que doña Evelyn Patricia Ardiles Castillo, es dueña de la propiedad ubicada en pasaje Yungay Bajo N°3669- A, comuna de Alto Hospicio, inscrita a fojas 809 Vuelta Número 1323 del Registro de Propiedad del año 2004 del Conservador de Bienes Raíces de Iquique.

2.- Que el 15 de mayo de 2017, pasadas las 10:00 horas aproximadamente, se produjo una rotura en el arranque de agua potable que daba servicio a la propiedad ubicada en pasaje Yungay Bajo N°3669, comuna de Alto Hospicio, propiedad colindante al inmueble de los demandantes, efectuándose requerimiento por el cliente de dicho domicilio, concurriendo la demandada a atender la emergencia dentro de los tiempos comprometidos en su nivel de calidad de atención, comprometidos en su Decreto Tarifario Vigente; produciéndose un nuevo incidente en el mismo lugar con fecha 11 de julio de 2018, efectuándose requerimiento a las 13:05 horas, asistiendo la demandada en los mismos términos.

3.- Que la rotura del arranque referida, provocó la filtración de agua al interior del inmueble ubicado en Pasaje Yungay Bajo N°3669- A, comuna de Alto Hospicio, de propiedad de la demandante doña Evelyn Patricia Ardiles Castillo.

4.- Que el 19 de febrero de 2019, doña Evelyn Ardiles ingresó reclamo por daños a Aguas del Altiplano, con ocasión del siniestro



producido el 11 de julio de 2018, contestando la empresa sanitaria, que el hecho sucedido se habría producido como consecuencia de un hecho absolutamente ajeno a la empresa, no obstante una vez ocurrida la situación, se llevaron a efecto las acciones de emergencia correspondientes, y que no asumirían responsabilidad por los daños alegados por el hundimiento debido a que el inmueble se encuentra en una área de alta concentración salina, lo que produce que la capacidad de resistencia mínima del terreno se encuentre altamente debilitada.

5.- Que el 7 de marzo de 2019, doña Evelyn Ardiles, ingresó reclamo por la negativa de la demandada a responder de los daños en la Superintendencia de Servicios Sanitarios, quien el 10 de mayo de 2019, le respondió que carecía de facultades para hacerse parte de contiendas por daños a los bienes y a la propiedad, y que en relación a los hechos ocurridos conforme a los registros existentes en la empresa demandada, asociados a emergencias en el Pasaje Yungay Bajo de la comuna de Alto Hospicio, de las 4 que han ingresado correspondientes roturas de arranque, la empresa demandada ha dado respuesta dentro de los tiempos comprometidos en las bases del proceso tarifario vigente.

6.- Que por la rotura del arranque domiciliario los días 15 de mayo de 2017 y 11 de julio de 2019, y la filtración aparejada a ello, dada la alta concentración sales solubles que posee la comuna de Alto Hospicio, al verse sometido el terreno a la infiltración y/o inundaciones, sufren la disolución provocándose hundimientos, socavones y/o asentamientos diferenciales en el subsuelo, ello podría suponer una alta probabilidad de socavamiento del terreno bajo el inmueble de autos.

DECIMO QUINTO: Establecido aquello, corresponde determinar la concurrencia del segundo presupuesto de la responsabilidad alegada, esto es, la existencia de un hecho ejecutado con dolo o culpa.



Cabe indicar que ello configura nuestro sistema subjetivo de responsabilidad civil, toda vez que, como enseña nuestra doctrina, la imputabilidad subjetiva que desencadena una responsabilidad subjetiva, se funda en la culpabilidad, factor psíquico, con sus dos variantes: la culpa y el dolo, a su turno es menester señalar que la culpa es un factor de atribución de responsabilidad civil regulado en el artículo 44 del Código Civil, precepto que distingue tres especies de culpa (grave, leve y levísima) y dispone que “Culpa o descuido sin otra calificación, significa culpa o descuido leve”, por lo que, de conformidad con las disposiciones del Título XXXV del mismo cuerpo legal, las cuales no califican la culpa, hay que necesariamente concluir que el grado mínimo de negligencia requerido para configurar la responsabilidad pretendida es la culpa o descuido leve, que, según se desprende del referido artículo 44 en relación con las normas del mencionado Título XXXV, significa la falta de una diligencia o cuidado ordinario o mediano al desplegar la conducta dañosa.

El dolo por su parte, de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 44 del Código de Bello, consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.

DECIMO SEXTO: Que, así la prueba rendida sintetizada en el considerando tercero, y el mérito de los documentos establecidos en el motivo décimo cuarto, en especial del Ord. N°3134/2019 Región de Tarapacá Superintendencia Servicios Sanitarios, valorada en forma legal, permite establecer que la demandada, ocurrida la emergencia, esto es, detectada la filtración en el inmueble vecino al de los actores, adoptó las medidas de resguardo correctas, atendiendo de forma oportuna todas las solicitudes de atención indicadas por los demandantes correspondientes a los días 15 de mayo de 2017 y 11 de julio de 2018 en los periodos que establece la ley, de modo que no cabe sino concluir que el hecho que da origen a la acción, no puede estimarse, a juicio de esta sentenciadora, como “ilícito”, esto es, ejecutado con dolo o culpa por la demandada, que tenga la virtud de



generar la responsabilidad que se demanda, de manera que se tendrá por no acreditado en marras el elemento en estudio.

DECIMO SEPTIMO: Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado por los actores el hecho ilícito culpable, ni menos doloso ejecutado por la parte demandada, resulta innecesario pronunciarse sobre los demás requisitos, motivo por lo que esta sentenciadora rechazará la acción, en todas sus partes, según se dirá en lo resolutivo del presente fallo.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170 y 342, 426 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículos 1698, 1700, 1712 y 2314 y siguientes del Código Civil, y demás normas pertinentes, **SE DECLARA:**

I.- Que, **SE RECHAZA** la demanda de indemnización de perjuicios deducida en lo principal de folio 1, por don **LUIS FERNANDO DÍAZ MUÑOZ**, abogado, en representación de doña **EVELYN PATRICIA ARDILES CASTILLO**, y de don **ORLANDO SEGUNDO GARAY CASTRO**, en contra de **AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.**, representada legalmente por don **SERGIO PATRICIO FUENTES FARIAS**.

II.- Que no se condena en costas a los actores, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Anótese, regístrese y notifíquese.

RoI 3-2020

Dictada por doña **PATRICIA ALEJANDRA SHAND SCHOLZ**, Juez Titular de este Segundo Juzgado de Letras de Iquique.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Iquique, diecinueve de Abril de dos mil veintitrés**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXKTXEGXVLV

